

En el debate sobre el desarrollo de la acuicultura chilena, existe un punto que comienza a consolidarse con mayor claridad: la competitividad del sector no depende únicamente de sus capacidades productivas, tecnológicas o naturales, sino también —y de manera cada vez más determinante— del entorno político y regulatorio que la sostiene.

La industria ha demostrado, a lo largo de las últimas décadas, una notable capacidad de adaptación. Ha incorporado innovación, ha elevado sus estándares ambientales y ha logrado posicionarse como uno de los principales motores exportadores del país. Sin embargo, ese avance encuentra hoy un límite que no es técnico, sino institucional. La falta de certezas, la superposición normativa y los tiempos de tramitación han configurado un escenario donde proyectar el crecimiento se vuelve cada vez más complejo.

En este contexto, el rol del apoyo político deja de ser una variable secundaria para transformarse en un factor estructural. No se trata solo de voluntad, sino de la capacidad efectiva del Estado para establecer reglas claras, coherentes y sostenibles en el tiempo. La necesidad de avanzar hacia marcos regulatorios más previsibles, con procesos definidos y una institucionalidad coordinada, aparece hoy como una condición indispensable para sostener la inversión y el desarrollo de largo plazo.

Certeza política: Condición habilitante para el futuro

Esta demanda no es abstracta. Responde a tensiones concretas que enfrenta el sector. El estancamiento productivo asociado a restricciones regulatorias y territoriales, la incertidumbre en torno a cambios normativos y las dificultades para habilitar nuevos proyectos reflejan un entorno donde la toma de decisiones estratégicas se ve condicionada por factores externos a la operación misma.

A ello se suma un escenario global cada vez más exigente. Los mercados demandan mayor trazabilidad, estándares ambientales más estrictos y eficiencia productiva, mientras que la competencia internacional avanza con marcos regulatorios que, en muchos casos, ofrecen mayores certezas para la inversión. En este contexto, la innovación —aunque imprescindible— no puede desplegar todo su potencial si no existe un entorno habilitante que la acompañe.

El desafío, entonces, es avanzar hacia una política pública que entienda la acuicultura como una actividad estratégica para el país. Esto implica no solo reconocer su aporte económico, sino también su rol en la seguridad alimentaria global, el desarrollo regional y la generación de empleo en zonas donde existen pocas alternativas productivas de similar escala.

Una señal política clara permite ordenar prioridades, alinear a los distintos actores y reducir las brechas entre el potencial del sector y su desempeño efectivo. Sin esa señal, la industria queda expuesta a ciclos de incertidumbre que afectan su capacidad de planificación, limitan la innovación y postergan inversiones que son clave para su evolución.

